

Concepción, cinco de mayo del año dos mil veintitrés.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

En cuanto al recurso deducido por la defensa del acusado Luis Corvalán Novoa:

PRIMERO: Que, la abogada Karen Muñoz Ramírez, en representación de Luis Abraham Corvalán Novoa, recurre de nulidad en contra de la sentencia definitiva de siete de febrero del año en curso, dictada en causa RIT 60-202; RUC 2100424400-9, del Tribunal del Juicio Oral en lo Penal de Los Ángeles, que condenó a su representado a la pena de 10 años y un día de presidio mayor en su grado medio, multa de 40 unidades tributarias mensuales, y accesorias legales; y a la de 5 años y un día de presidio mayor en su grado mínimo, multa de 40 unidades tributarias mensuales, y accesorias legales, por 2 delitos de tráfico de sustancias estupefacientes o psicotrópicas, previstos y sancionados en el artículo 3 en relación al artículo 1 de la ley 20.000, en grado de consumado.

Funda su exordio en la causal del artículo 373 literal b) del Código Procesal Penal, que hace consistir en la errónea aplicación que del artículo 74 del Código Penal que ha efectuado el Tribunal Penal, en relación a lo que establece el artículo 3° de la Ley 20.000.

Refiere que lo que requiere la ley para que se castigue a una persona por todas las penas correspondientes a las diversas infracciones, es que sea culpable de dos o más delitos.

En el caso en concreto, y tal como fueran fijados los hechos en la sentencia recurrida, su representado es culpable de un solo delito de tráfico de drogas, en atención a que si bien es responsable de más de un hecho,



todos ellos componen un delito continuado, teniendo en consideración la naturaleza del delito de tráfico de drogas.

Añade que, tanto la doctrina como la jurisprudencia de nuestro país ha entendido de manera sistemática y uniforme al delito de tráfico de drogas como un delito de emprendimiento, de acuerdo a lo cual, lo que se castiga es el desarrollo de una actividad delictiva, de modo que se sancionan como un sólo delito los diversos actos que componen esa actividad (ventas, compras, posesión, traslados de droga entre otros), y no cada uno de ellos de manera independiente. Así la realización en múltiples ocasiones de una misma conducta no configura varios ilícitos, sino uno sólo de ellos, como en el caso de quien realiza varias compras de droga en diversos momentos.

Agrega que el error de derecho alegado se produce al aplicar dos condenas de acuerdo lo establece el artículo 74 del código penal, a hechos que constituyen un solo delito de acuerdo lo establece el artículo 3° en relación al artículo 1° de la Ley 20.000.

Solicita se anule la sentencia, se dicte sentencia de reemplazo considerando los hechos que se tuvieron por probados como un solo delito de tráfico de drogas, y en aplicación a la atenuantes y agravantes que se dieron por establecidas, su representado sea condenado a la pena de 10 años y 1 día de presidio mayor en su grado medio, multa de 40 unidades tributarias mensuales y accesorias legales.

SEGUNDO: Que, el recurso de nulidad reglado en el estatuto procesal penal ha sido instituido por el legislador para invalidar el juicio oral y la sentencia definitiva o solamente ésta, por las causales expresamente señaladas en la ley, esto es, por contravenciones precisas y categóricas cometidas en cualquier etapa del procedimiento o en el pronunciamiento

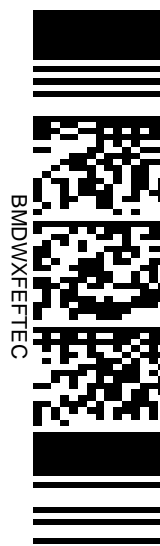


del veredicto, abriendo paso a una solución de ineficacia de todos aquellos actos en que se hubieren violentado sustancialmente derechos o garantías asegurado por la Constitución o por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes-artículo 373 letra a)- o cuando en el pronunciamiento de la sentencia se hubiere hecho una inexacta aplicación del derecho que hubiere influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo-artículo 373 letra b).

TERCERO: Que, de este modo, el artículo 373 del Código Procesal Penal en su letra b) autoriza anular el juicio y la sentencia “Cuando, en el pronunciamiento de la sentencia, se hubiese hecho una errónea aplicación del derecho que hubiere influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo”. Su objetivo es el respeto de la correcta aplicación de la ley, pero ampliado en general a la correcta aplicación del derecho, para incorporar también otras fuentes formales integrantes del ordenamiento jurídico".

Para que la errónea aplicación del derecho pueda servir de fundamento a un recurso de nulidad debe haber influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo, idea que la reafirma el artículo 375 del citado estatuto legal que, refiriéndose a los "defectos no esenciales", declara que "No causan nulidad los errores de la sentencia recurrida que no influyeren en su parte dispositiva, sin perjuicio de lo cual la Corte podrá corregir los que advirtiere durante el conocimiento del recurso".

CUARTO: Que, la Excm. Corte Suprema ha declarado que, al requerir la ley que la infracción sea “sustancial”, está exigiendo que sea “trascendente, de mucha importancia o gravedad, de tal modo que el defecto sea, en definitiva, insalvablemente ineficaz frente al derecho



constitucional del debido proceso.” (Rol 3.319-02, Revista Procesal Penal N°4, diciembre 2002, p. 41)

Sobre esta misma exigencia ha precisado que “El referido arbitrio de impugnación debe entenderse regido por los mismos preceptos y reglas generales que gobiernan la nulidad procesal, por consiguiente para su procedencia deben concurrir los presupuestos básicos de éstas, entre los cuales se encuentra el llamado principio de trascendencia que, por lo demás, recoge el artículo 375 de la recopilación procesal criminal. En virtud de dicho dogma para que la transgresión denunciada pueda servir de soporte al arbitrio de marras debe constituir un atentado de tal magnitud que importe un perjuicio al litigante afectado, que conduzca a la ineficacia de la garantía, resultando de ello un desconocimiento del núcleo esencial de ésta, privándola de toda eficiencia, en otras palabras, se exige que el vicio sea sustancial, trascendente, de mucha importancia o gravedad, de suerte que el defecto entrase, limite o elimine al derecho preterido. (Sentencia Excm. Corte Suprema, Rol 5960-05).

QUINTO: Que, el delito continuado, expresaba el catedrático Santiago Mir Puig, en Derecho Penal, Parte General, décima edición, página 670 “constituye otra construcción de la doctrina y la jurisprudencia, acogida expresamente en el CP desde 1983, para evitar tener que admitir la concurrencia de varios hechos típicos constitutivos de otros tantos delitos cuando existe una unidad objetiva y/o subjetiva que permite ver a distintos actos, por sí solos delictivos y no producidos en forma de «unidad natural de acción», como parte de un proceso continuado unitario. Se habla en este caso de una «unidad jurídica de acción».

Nuestra Excelentísima Corte Suprema, en numerosos fallos, alude a que se deben cumplir las exigencias pertinentes para que estemos en



presencia de un delito continuado. Ha señalado “...Que la ley penal no contempla como institución la figura del delito continuado, ya que sólo se preocupa de reglamentar ciertas cuestiones de reiteración, que por cierto no es lo mismo. Sin embargo, doctrina autorizada cree posible, que ciertos hechos punibles verificados en tiempos diversos, pueden ser considerados como un todo y castigados como si fuere un solo delito, si existe entre esas acciones un mismo designio criminoso que satisface las exigencias del tipo y transcurrido un breve plazo entre los hechos en conexión, opinión que también ha sido aceptada por la jurisprudencia de los tribunales de justicia...”. Rol N°90-2003, sentencia de 7 de marzo de 2003. En otra causa resolvió el Excelentísimo Tribunal, en referencia, “...Que aun cuando en nuestro ordenamiento positivo no se encuentra reglamentado el tratamiento del delito continuado, los Tribunales lo han aceptado excepcionalmente para situaciones en que concurriendo pluralidad de acciones, unidad de lesión jurídica y conexión entre las acciones no existen elementos bastantes para individualizar cada uno de los hechos punibles de modo que pudieran ser considerados como delitos distintos...

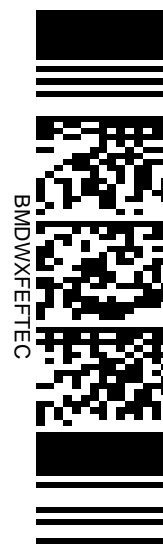
De la doctrina, y la jurisprudencia de nuestra Excelentísima Corte Suprema, se desprende que los requisitos exigidos para que se configure el delito continuado son: I).- objetivos a).-Pluralidad de acciones realizadas. b).- Acciones ejecutadas dentro de cierto lapso en tiempos diversos, esto es independencia fáctica. c).-Cada acción ejecutada, considerada aisladamente, satisface todas las características del tipo legal, de manera que podrían ser punibles autónomamente. d).-Mismo sujeto pasivo respecto de aquellos hechos que atentan contra bienes personales, como son los delitos sexuales. e).- Unidad de lesión jurídica. Esto es bien jurídico o norma lesionada idéntico, semejante o de igual naturaleza. f).-Una homogénea forma de



comisión de las acciones realizadas. II).- Subjetivos. Esto es el vínculo que necesariamente los une. Sobre este punto ha sido la Jurisprudencia, más que la Doctrina, y seguramente siguiendo el modelo Italiano, que ha considerado que en las acciones realizadas debe existir un designio, propósito criminal idéntico y único. El profesor Garrido Montt, señala que debe haber un dolo común o bien un dolo global que satisfaga la unidad. Esto es la decisión ejecutar una serie de actos típicos para alcanzar determinados logros. El profesor Enrique Cury agrega que más que el dolo, el vínculo que une los actos, atendida las circunstancias, es el hecho que deben necesariamente ejecutarse fraccionadamente, violándose una misma norma de deber.

La jurisprudencia, en los roles de la Corte Suprema 322-2020 y 20.396-2018, rol 63-2017 de la Corte de Apelaciones de San Miguel y rol 123-2018 de la Corte de Apelaciones de Valdivia, ha dicho que no basta con acreditar que una misma persona comete actos similares dentro de un periodo de tiempo para afirmar que existe un propósito en común, ya que dolo y propósito son cosas distintas.

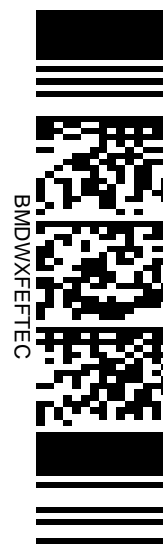
SEXTO: Que, a propósito de cómo se sanciona el delito continuado, Ángel Calderón Cerezo, ex Presidente del Tribunal Supremo Español y José Antonio Choclán Montalvo, en Manual de Derecho Penal, Tomo I, página 381, expresan que “frente al caso del concurso real, caracterizado como supuesto de pluralidad de hechos independientes, la dependencia entre diversas acciones imputables al autor, que se manifiesta cuando entre ellas existe una determinada relación interna y se da una cierta continuidad en la comisión, ha determinado, fundamentalmente por razones de economía procesal, que aquella pluralidad sea tratada como hipótesis de unidad de acción, más precisamente, como caso de unidad



jurídica de acción. Desde este punto de vista, la construcción del delito continuado supone una excepción a las reglas penológicas aplicables a la serie de hechos independientes -concurso real-. Sin embargo, aunque originariamente, desde la llamada teoría de la ficción, se atribuye al delito continuado un fundamento pietista o de benignidad, es decir, una función mitigadora del sistema de acumulación de penas previsto para el concurso real, modernamente se entiende que el delito continuado puede producir consecuencias desfavorables al reo, de modo que es concebido como realidad jurídica. Esta idea es aceptada por la jurisprudencia, que abandona la originaria calificación de ficción pietatis causa, para acabar atribuyendo al delito continuado la naturaleza de ente real ontológico y esencialmente autónomo”.

El profesor Enrique Cury Urzúa, en Derecho Penal, Parte General, página 658 expresa que:” si se admite que las conductas componentes de un delito continuado están vinculadas por un nexo de necesidad que, sin amalgamarlas tácticamente, las somete a una valoración conjunta, el precepto legal que resuelve sobre la punibilidad se encuentra en el inciso segundo del artículo 75 del Código Penal”. Tal disposición prescribe que en estos casos sólo se impondrá la pena mayor asignada al delito más grave (la llamada aspiración).

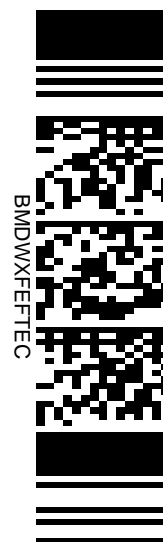
Destaco a objeto de esbozar como se lo sanciona en el derecho comparado, que éste sí ha sido reconocido en el Código Español de 1995 en el artículo 74 el que manda que: “el que, en ejecución de un plan preconcebido o aprovechando idéntica ocasión, realice una pluralidad de acciones u omisiones que ofendan a uno o varios sujetos e infrinjan el mismo precepto penal o preceptos de igual o semejante naturaleza, será castigado como autor de un delito o falta continuados con la pena señalada



para la infracción más grave, que se impondrá en su mitad superior, pudiendo llegar hasta la mitad inferior de la pena superior en grado”. Cuando se trate de infracciones contra el honor y la libertad e indemnidad sexuales que afecten a un mismo sujeto pasivo se atenderá a la naturaleza del hecho y del precepto infringido para aplicar o no la continuidad delictiva.

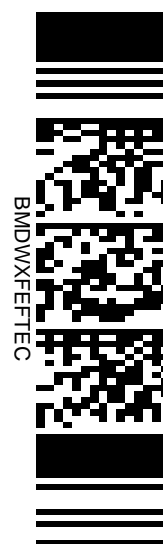
SÉPTIMO: Que, en la especie, examinada la sentencia refutada, particularmente de sus motivos TRIGÉSIMO TERCERO, en donde se dan por establecidos los hechos controvertidos y CUADRAGESIMO SEGUNDO, referido a las circunstancias modificatorias de responsabilidad criminal y determinación de la pena, fluye que los condenados incurrieron en distintas y sucesivas actuaciones dolosas, agotándose en cada una de ellas la conducta prohibida, de modo que, contrariamente a lo sostenido por la recurrente, no se trata de un delito continuado que se caracteriza por un único propósito, cuya materialización se fracciona en diversos actos que infringen el mismo precepto legal, y, consecutivamente, respecto de Luis Abraham Corvalán Novoa los sentenciadores hicieron una correcta interpretación de la ley al condenarlo como autor de dos delitos de tráfico de estupefacientes, previstos y sancionados en los artículo 3° de la Ley 20.000 en relación con el artículo 1° de la citada ley, a una pena privativa de libertad de diez años y un día de presidio mayor en su grado medio por el primero de éstos y a otra de cinco años y un día de presidio mayor en su grado mínimo por el segundo delito.

OCTAVO: Que, en efecto, aún en el escenario propuesto por la recurrente de nulidad, y, además, que los sentenciadores no dieron aplicación al artículo 351 del Código Procesal Penal, conforme consta el CUADRAGESIMO SEGUNDO motivo del fallo atacado, sólo en lo que



refiere al hecho 1, esto es, aquel perpetrado el día 14 de septiembre del año 2021, valga señalar que el delito de tráfico de sustancias estupefacientes y sicotrópicas, previsto en el artículo 3° en relación con el artículo 1°, ambos de la Ley N°20.000, se castiga con la pena de presidio mayor en sus grados mínimo a medio y multa de 40 a cuatrocientas unidades tributarias mensuales; que concurre la circunstancia agravante o de aumento de punibilidad del artículo 19 letra a) de la Ley 20.000, la que aumenta la pena en un grado, lo que alza su base a la pena de presidio mayor en su grado máximo, esto es, un de grado de una pena divisible y concurriendo la circunstancia atenuante de responsabilidad del artículo 11 N°9 del Código Penal y la agravante del artículo 12 N°16 del mismo cuerpo legal, al realizar una compensación racional de ellas, el juzgador está facultado para recorrer la pena en toda su extensión, conforme lo señala el artículo 67 del Código de castigo, pudiendo imponerla desde quince años y un día hasta veinte años de presidio mayor en su grado máximo.

En consecuencia, de la forma expuesta por los jueces de fondo y de la manera razonada en los fundamentos anteriores en la presente sentencia, al condenar a Luis Abraham Corvalán Novoa como autor de dos delitos de tráfico de estupefacientes, previstos y sancionados en el artículo 3° de la Ley 20.000 en relación con el artículo 1° del mismo texto legal, a una pena privativa de libertad de diez años y un día de presidio mayor en su grado medio por uno de éstos y a otra de cinco años y un día de presidio mayor en su grado mínimo por el segundo, queda en evidencia que éstos hicieron una correcta calificación jurídica a los hechos establecidos y a la penas impuestas en el fallo reprochado, al dar aplicación al artículo 74 del Código Penal, interpretación que a estos sentenciadores no les parece errada, ni que con ello se configure la transgresión reclamada, ya que de ellos se colige que

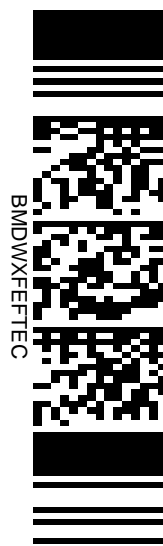


los sentenciadores no incurrieron en la infracción de ley denunciada que hubiere influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo.

En cuanto al recurso deducido por la defensa del acusado Cristián Erices González:

NOVENO: Que, el abogado Andrés Méndez Ortega, por su representado Cristián Alejandro Erices González, deduce recurso de nulidad en contra de la sentencia definitiva de siete de febrero del año en curso, dictada por el Tribunal del Juicio Oral en lo Penal de Los Ángeles, en tanto cuanto lo condenó como autor del delito de tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, en grado de consumado, previsto y sancionado en el artículo 1° y 3° de la Ley 20.000, cometido el día 10 de septiembre del año 2021, en la ciudad de Los Ángeles, a la pena de cinco (5) años y un (1) día de presidio mayor en su grado mínimo, multa de cuarenta (40) Unidades Tributarias Mensuales; a la inhabilitación absoluta perpetua para derechos y a la inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos durante el tiempo de la condena; y comiso de las especies incautadas. Se le condena, además, como autor del delito de cultivo y cosecha de especies vegetales del género cannabis sativa, en grado de consumado, previsto y sancionado en el artículo 8 de la Ley 20.000, cometido en día 14 de septiembre del año 2021, en la ciudad de Los Ángeles, a la pena de quinientos cuarenta y un días (541) de presidio menor en su grado medio; multa de cuarenta (40) Unidades Tributarias Mensuales; suspensión de cargos u oficios públicos durante el tiempo de la condena y comiso de las especies incautadas, con excepción de la camioneta Mitsubishi L 200 placa patente KPTG-49 que deberá serle devuelta.

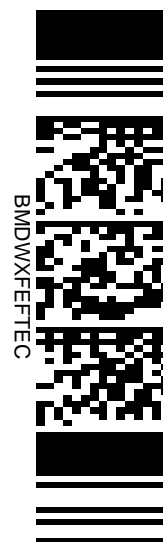
Fundamenta su recurso en la causal del artículo 373 b) del estatuto procesal penal, ya que en su concepto la sentencia definitiva, en los motivos



VIGÉSIMO NOVENO y CUADRAGESIMO SEGUNDO -los que reproduce-, ha afectado el principio de NON BIS IN IDEM, ya que no aplicó lo que en derecho correspondía, porque el delito de tráfico de drogas es un delito de emprendimiento, además, porque señaló que su representado iba a colaborar sustancialmente con el esclarecimiento de los hechos, al punto que la propia sentencia reconoce que él en compañía del co-imputado Diego Figueroa concurrieron en varias oportunidades al norte del país con el propósito de adquirir marihuana, para posteriormente comercializarla en la ciudad de Los Ángeles.

Señala que la sentencia recurrida ha realizado una errónea aplicación del derecho y este ha influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo, ya que condenó a su representado por dos delitos, el primero de tráfico de drogas del artículo 3° y, además, por el artículo 8 ambas disposiciones de la Ley 20.000, de esta manera le impone dos condenas, en circunstancias que solo debió imponer una condena por el delito de tráfico de drogas del artículo 3° de la Ley 20.000, y absolverlo por el delito de cultivo del género cánnabis prescrito sancionado en el artículo 8 de la ley 20.000, no aplicando el concurso de delitos que existe en la especie, en particular el concurso aparente de leyes penales, donde el delito base de tráfico desplaza al cultivo, debido condenar solo por el delito base tráfico y absolver por el cultivo, infringiendo con ello el principio del non bis in ídem.

Solicita se anule la sentencia en lo pertinente, esto es, absolver a su representado por el delito de cultivo del género cannabis, prescrito y sancionado en el artículo 8 de la ley 20.000, conforme al artículo 385 del Código Procesal Penal, en subsidio se anule el juicio oral total o parcialmente y la sentencia impugnada; determine el estado en que debe



quedar el proceso, ordene un nuevo juicio oral y público, integrado por jueces no inhabilitados anulando la sentencia.

DÉCIMO: Que, como reiteradamente lo ha sostenido la doctrina procesal especializada, como asimismo, la jurisprudencia de los Tribunales Superiores de Justicia, en el remedio adjetivo de marras se consulta el carácter de extraordinario y de derecho estricto, lo que supone, a priori, que él sólo resulta procedente en contra de ciertas y determinadas resoluciones judiciales y en virtud de causales taxativamente señaladas por el legislador instrumental penal, las que en su interposición deberán dar exacto, oportuno e íntegro cumplimiento a las exigencias que autoricen su procedencia, en los términos que estatuye el compendio adjetivo penal. De otro lado, la circunstancia de tratarse de un medio de impugnación de derecho estricto, supone que no constituye una instancia, lo que equivale a sostener que a través de este recurso, esta Corte en forma exclusiva y excluyente sólo debe revisar y/o cotejar la aplicación del derecho efectuada por el tribunal de base a los hechos establecidos, pero tiene proscrita la posibilidad de hacerlo respecto de éstos últimos.

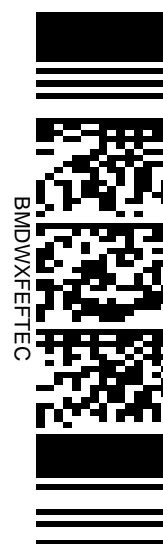
Que, el recurso de nulidad reglado en el estatuto procesal penal ha sido instituido por el legislador para invalidar el juicio oral y la sentencia definitiva o solamente ésta, por las causales expresamente señaladas en la ley, esto es, por contravenciones precisas y categóricas cometidas en cualquier etapa del procedimiento o en el pronunciamiento del veredicto, abriendo paso a una solución de ineficacia de todos aquellos actos en que se hubieren violentado sustancialmente derechos o garantías asegurado por la Constitución o por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes-artículo 373 letra a)- o cuando en el pronunciamiento de la sentencia se hubiere hecho una inexacta aplicación del derecho que



hubiere influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo-artículo 373 letra b).

DECIMOPRIMERO: Que, en el artículo 3º de la Ley 20.000 se sanciona a quien “trifica”, con las sustancias referidas en el artículo 1º del mismo texto, como también a quienes induzcan, promuevan o faciliten el uso o consumo de tales sustancias. Al efecto, la Excelentísima Corte Suprema de Justicia ha reiterado que la acción típica del delito que nos ocupa es sólo la de “traficar”, ilícito generalmente reconocido como un delito de peligro para la salud pública, comportamiento típico que consiste en difundir o distribuir la droga entre los integrantes del grupo social, sea a título oneroso o gratuito, ya que la ley refiere a que se trafique “a cualquier título”.

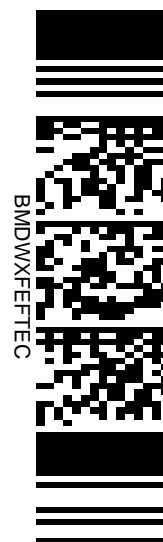
Se trata de un delito de peligro en abstracto en cuanto que la conducta a que atiende se cierne como desventurada contingencia sobre la salud ciudadana, como amenazante riesgo sobre su seguridad. Al ser un delito de peligro en abstracto, forzosamente ha de ser un delito de mera actividad, por cuanto el tipo queda realizado con la mera realización de la conducta descrita en el tipo sin que precise de ningún ulterior resultado para su consumación. (Así lo ha sancionado el Tribunal Supremo Español R.J. 1993/255; R.J. 1988/998; R.J. 1986/3109; R.J. 1991/1746 y; R.J. 1991/4733). También, cabe destacar que la doctrina y la jurisprudencia ha dicho que se trata de un delito de consumación anticipada, es decir, se consuma antes de que se produzca la lesión del bien jurídico protegido. R.J. 2000/1715 de 15 de marzo del año dos mil se declara que”...y de todos es sabido que este tipo delictivo es de los llamados de consumación anticipada en los que es suficiente la posesión inmediata, incluso mediata, del producto



prohibido para que exista la comisión delictiva”. (Jesús Morant Vidal, el Delito de Tráfico de Drogas, página 77).

Además, tratándose de los delitos de tráfico ilícito de estupefacientes, existe entre nosotros consenso, en cuanto a que el principal bien jurídico protegido es la salud pública, esto es, afectan al bien jurídico “salud pública”, en la medida que las sustancias objeto material de los mismos lo hacen. La salud pública, como bien jurídico protegido en estos delitos, expresan los autores Sergio Politoff, Jean Pierre Matus y María Cecilia Ramírez, en la obra Lecciones de Derecho Penal Chileno, Parte Especial, página 574 “es la salud física y mental de aquel sector de la colectividad que pueda verse afectado por el efecto nocivo de las sustancias prohibidas”, a lo que debe agregarse el peligro que este delito supone para la libertad de los individuos afectados, de resultados de la eventual dependencia física o síquica a que el consumo frecuente de las mismas puede conducir, con las derivaciones negativas de marginación social que lleva consigo la drogadicción. Agregan que “la medida del peligro para estos bienes jurídicos se encuentra en la posibilidad de la difusión incontrolable de las sustancias prohibidas, ya que de este modo tales sustancias son puestas ilícitamente a disposición de los consumidores finales”.

En palabras de Rodríguez Ramos, expresa el catedrático español Jesús Morant Vidal, en el Delito de Tráfico de Drogas, página 74, “se trata del conjunto de condiciones que positiva o negativamente garantizan y fomentan la salud de los ciudadanos. Esta salud general entendida como la conjunción y síntesis de las buenas condiciones físicas de los ciudadanos y que en un sentido muy amplio sería equivalente a la paz social, se debería ver intensamente vulnerada por los comportamientos registrados en la norma penal”.



El vocablo “Traficar” es entendido por nuestra jurisprudencia en sentido amplio, ello en atención a la expresión “a cualquier título” que incluye incluso a la donación. El artículo 3° de la Ley N° 20.000 sanciona a aquellos que sin contar con la competente autorización, importen, exporten, transporten, adquieran, transfieran, sustraigan, posean, suministren, guarden o porten consigo sustancias estupefacientes.

Las conductas de tráfico ilícito de drogas, consisten en hacer posible la circulación incontrolada de una sustancia prohibida entre un número indeterminado de consumidores finales, mediante la promoción, facilitación o inducción a su uso o consumo.

DECIMOSEGUNDO: Que, en el caso del artículo 8° de la Ley 20.000, incurre en la conducta prohibida y es amenazado con una pena aflictiva, quien, sin contar con la debida autorización, siembre, plante, cultive o coseche especies vegetales del género cannabis u otras productoras de sustancias estupefacientes o sicotrópicas, a menos que justifique que están destinadas a su uso o consumo personal exclusivo y próximo en el tiempo, caso en el cual sólo se aplicarán las sanciones de los artículos 50 y siguientes.

De acuerdo al texto legal, sólo podrá eximirse de la pena de simple delito, el sembrador, plantador, cultivador o cosechador de las especies vegetales en cuestión, si justifica que esas acciones van dirigidas a su uso o consumo personal y próximo en el tiempo.

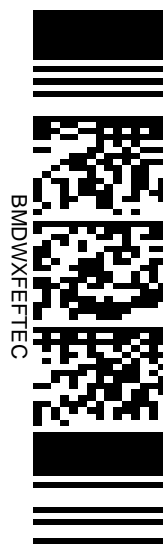
DECIMOTERCERO: Que, este examen sobre la posibilidad de producción del resultado de peligro resulta aún más imperioso respecto de aquellas conductas como las tipificadas en el artículo 8° de la Ley N° 20.000, precepto mediante el cual no se castiga el tráfico ilícito de



estupefacientes ya sea en su sentido estricto o amplio, sino que se está previniendo el peligro de que, a través de la plantación de especies vegetales del género cannabis, alguien pueda en el futuro poner en peligro la salud pública elaborando con el producto de dicha planta sustancias estupefacientes que puedan facilitarse a terceros para su uso o consumo.

Mediante esta técnica legislativa se anticipa la barrera de la protección penal a una etapa muy primaria o germinal del llamado ciclo económico de la producción y tráfico de la droga, esto es, de todos los actos destinados a poner indebidamente a disposición del consumidor final sustancias sicotrópicas o estupefacientes y es tal consideración la que impide afirmar inequívocamente que el mero hecho de sembrar, plantar, cultivar y cosechar especies vegetales del género cannabis sin la autorización debida, supone que de éstas se obtendrá droga y que a ésta se le dará un destino que puede afectar el bien jurídico salud pública. De ahí precisamente que el legislador excluya de la sanción prevista en el citado artículo 8º los casos en que se justifique que la droga se destinará al uso o consumo personal exclusivo y próximo en el tiempo del autor.

DECIMOCUARTO: Que, en la especie, conforme obra en el motivo VIGÉSIMO CUARTO, letra i.- del fallo impugnado, el condenado Cristián Alejandro Erices González, en el domicilio ubicado en pasaje Oro Grande N° 1152, de la ciudad de Los Ángeles, cultivaba 22 plantas del género cannabis sativa y guardaba 73 gramos de cannabis sativa cosechada dentro de un macetero, sin que justificare que estaban destinados a su uso o consumo personal exclusivo y próximo en el tiempo, situación ajena e independiente al tráfico de estupefacientes, previsto y sancionado en el artículo 3º en relación con el artículo 1º de la Ley 20.000, por el cual también ha sido condenado, de modo que no procede el mentado concurso



aparente de leyes penales, ya que se trata de hechos diversos y de dos figuras típicas autónomas y, en consecuencia, cobra aplicación el concurso real o material previsto en el artículo 74 del Código Penal, el cual manda que “al culpable de dos o más delitos se le impondrán todas las penas correspondientes a las diversas infracciones”.

En este escenario, llevan la razón los jueces de fondo cuando en el VIGÉSIMO NOVENO fundamento concluyen que “esta alegación será desestimada sin más dilación en atención a que la defensa del encartado Erices en su argumentación se desentiende del transporte de marihuana que su representado admitió haber efectuado junto a Diego Figueroa desde el norte del país a la ciudad de Los Ángeles los días 9 y 10 de septiembre de 2021, establecidos en el considerando vigésimo cuarto letras f) e i) de esta sentencia, y que, según declaración de Diego Figueroa, eran alrededor de 20 ó 22 kilos”.

“De esta manera, el transporte de 20 ó 22 kilos de marihuana desde el norte del país hasta la ciudad de Los Ángeles constituye un delito de tráfico de drogas distinto y desvinculado de las 22 plantas de cannabis sativa que le fueron incautadas durante el registro de fecha 14 de septiembre de 2014 en el domicilio de Pasaje Oro Grande N° 1152 Los Ángeles, porque no es posible sostener en ningún caso que la marihuana transportada desde el norte del país haya provenido del cultivo que tenía el encartado Erices”.

DECIMOQUINTO: Que, en consecuencia, de la forma expuesta por los sentenciadores y de la manera inferida en los racionios anteriores, queda en evidencia que éstos hicieron una correcta calificación jurídica a los hechos establecidos, como asimismo de las penas aplicadas en concreto, glosa que a estos sentenciadores no les parece errada, ni que con ello se establezca la infracción reclamada, por lo que el recurso intentado no puede



progresar ya que los jueces del Tribunal del Juicio Oral en lo Penal no incurrieron en la infracción de ley denunciada que hubiere influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo.

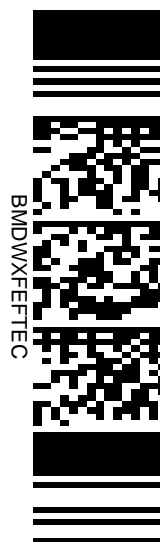
Por estas consideraciones, y visto, además, lo dispuesto en los artículos 372, 373 letra b), 376, 384 del Código Procesal Penal, se declara que **SE RECHAZAN**, sin costas, los recursos de nulidad deducidos por el abogado Andrés Méndez Ortega por su representado Cristián Alejandro Erices González y la abogada Karen Muñoz Ramírez por el condenado Luis Abraham Corvalán Novoa, en contra de la sentencia definitiva de siete de enero del año dos mil veintitrés, dictada por los Jueces del Tribunal del Juicio Oral en lo Penal de Los Ángeles, la que no es nula.

Regístrese y dese a conocer a los intervinientes en la audiencia fijada al efecto, sin perjuicio de su notificación por el estado diario.

Redactada por el ministro señor Jordán.

No firman, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, los ministros Panés y Jordán, el primero por encontrarse haciendo uso de licencia médica y, el segundo, por estar en comisión de servicio.

Rol N° 218-2023 – Penal.



Proveído por el Señor Presidente de la Quinta Sala de la Corte de Apelaciones de Concepción.

En Concepcion, a cinco de mayo de dos mil veintitrés, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en <http://verificadoc.pjud.cl> o en la tramitación de la causa.
A contar del 02 de abril de 2023, la hora visualizada corresponde al horario de invierno establecido en Chile Continental. Para la Región de Magallanes y la Antártica Chilena sumar una hora, mientras que para Chile Insular Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar dos horas. Para más información consulte <http://www.horaoficial.cl>